



## CRISIS NÃO TEM FIM

*Por Matías Mongan*

El concepto “estado paralelo” últimamente volvió a entrar en auge y suele ser utilizado en artículos académicos y periodísticos para describir los estrechos vínculos que existen entre estados *débiles* y grupos criminales organizados. Un fenómeno que suele materializarse con mayor fuerza a nivel departamental/ local y que afecta a algunos países centroamericanos (como por ejemplo Honduras, Guatemala, El Salvador<sup>1</sup>, el llamado “Triángulo Norte”) y sobre todo México<sup>2</sup>, un país que desde hace más de una década se “desangra” producto de la guerra contra el narcotráfico.

¿Pero ahora bien que entendemos por “estado paralelo”? Según Iván Briscoe este término puede ser utilizado para “describir la existencia de un nexo clandestino entre el liderazgo político formal, las facciones al interior del aparato del Estado y el crimen organizado y/o los expertos en violencia” (Briscoe, 2008). Este vínculo suele cristalizarse a través de señales tácitas y una inacción estratégica por parte del poder político para permitir la expansión de ciertos grupos ilegales. Como contraprestación estos sectores garantizarían el mantenimiento del status quo político a nivel regional y ayudarían a neutralizar por la fuerza a todos aquellos actores que pongan en riesgo el funcionamiento del sistema.

Aunque este es uno de los problemas más dramáticos que debe afrontar Latinoamérica actualmente, por lo que representa en pérdida de vidas humanas, la zona “gris del estado” (Auyero, 2007) no sólo se utiliza para regular la violencia y la relación con los grupos criminales organizados sino también para establecer los acuerdos clandestinos entre los poderes públicos y los conglomerados empresariales

---

<sup>1</sup> Estos tres países registraron un total de 13.129 homicidios durante el 2017. <http://www.oncenoticias.hn/honduras-guatemala-y-el-salvador-lograron-reducir-indices-de-violencia/>

<sup>2</sup> De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el 2017 se registraron un total de 29.168 homicidios intencionales, la cifra más alta desde que se comenzó a difundir esta estadística hace veinte años. <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/01/22/nuevo-record-de-violencia-en-mexico-80-asesinatos-por-dia-durante-2017/>



multinacionales. En este caso el arreglo funcionaría de la siguiente manera: las grandes empresas se comprometerían a financiar el sistema político a cambio de obtener beneficios sectoriales.

Los países desarrollados (EEUU y la Unión Europea) desde hace décadas reconocieron institucionalmente a los lobbies, estos grupos de presión que intentan influir en las políticas gubernamentales que crecieron de forma exponencial sobre todo luego del fin de la Guerra Fría que consolidó el capitalismo financiero a nivel mundial. A pesar de que es inevitable que surjan posibles focos de corrupción en un sistema como el actual en donde los poderes públicos y privados están totalmente entrelazados, las leyes que regulan el funcionamiento de los lobbies (en este sentido podemos destacar la sanción en 2007 por parte del congreso norteamericano de la Honest Leadership and Open Government Act), permiten tener un seguimiento más cercano sobre el funcionamiento y el destino de los fondos utilizados por estas *fuerzas oscuras* del capitalismo.

En Latinoamérica los preceptos emanados del Consenso de Washington llevaron a que los estados desregulen sus economías y sus andamiajes jurídicos para favorecer la llegada de capitales extranjeros. La obsesión por el “estado enano” y sobre todo la falta de controles llevaron a que el “estado paralelo” se institucionalice y crezca a espaldas de la sociedad.

Lo que ocurre en Brasil actualmente (con la famosa causa Lava Jato y el escándalo de sobornos de la empresa Odebrecht) es una muestra de que este fenómeno se ha instalado con fuerza al interior del sistema político y que trasciende a los distintos partidos políticos, bien ya sean de “izquierda” o de “derecha”. Los sucesivos gobiernos de la región en ningún momento se preocuparon por regular o al menos controlar al fenómeno, bien ya sea por connivencia o inoperancia, y dejaron esta tarea en manos de la justicia. Pero este sistema, por más que se presente como autónomo e independiente, está atravesado por intereses que reflejan la dinámica de poder, lo que le llevó a brindar una respuesta desigual y muchas veces ideologizada en su búsqueda de desarticular el “estado paralelo”.

Así por ejemplo no es de sorprender que en algunos países como Argentina ciertas causas de corrupción avancen y otras queden en stand by porque pueden



llegar a comprometer a círculos cercanos al poder. Por su parte en Brasil la justicia actuó de forma claramente desigual, ya que mientras actuó con extremada celeridad para condenar a la cúpula del PT y sobre todo a Lula para que este no pueda competir en las elecciones presidenciales del próximo 7 de Octubre, no hizo lo mismo con reconocidos dirigentes del PSDB (como el senador Aécio Neves) ni con el propio presidente Michel Temer, a pensar que la justicia contaba con pruebas mucho más contundentes para actuar en comparación a las que se utilizaron para condenar a Lula en segunda instancia el pasado 24 de enero.

Temer logró mantenerse en el poder gracias al respaldo brindado en tres ocasiones por el Congreso y la propia justicia. Pero como su figura aparece demasiado vinculada al esquema de corrupción seguramente no será de la partida en las próximas elecciones y el establishment tendrá que buscarse una figura alternativa para comandar la “democracia de baja intensidad” que se consolidó en Brasil luego del neogolpe institucional (Boaventura de Sousa Santos, 2016), perpetrado contra Dilma Rousseff en agosto del 2016.

Una tarea que no será para nada fácil. El proceso destituyente contra la mandataria no puso fin a la crisis institucional en el país, como muchos medios pronosticaban, sino que sirvió para fortalecer el poder de los grupos ultraconservadores y evangélicos. Estos sectores, que poseen alrededor de 42,3 millones de fieles en todo el territorio brasileño, aprovecharon el descontento generalizado para difundir su discurso reaccionario y lleno de odio hacia aquellos sectores que según su óptica trasgreden los principios morales brasileños. Así en estos últimos tiempos se han vuelto cada vez más común las censuras a obras de arte por promover valores “degradantes” y los escraches a figuras reconocidas que trabajan el tema de género (como por ejemplo ocurrió con la filósofa norteamericana Judith Butler a fines del año pasado).

Esta tendencia ultraconservadora, que ya está generando reacciones a nivel institucional, está siendo capitalizada por el ex militar Jairo Bolsonaro, quien actualmente cosecha entre el 16 y el 20 del respaldo electoral de acuerdo al último sondeo realizado por la encuestadora Datafolha a fines de enero. Aunque se encuentra lejos del ex presidente Lula da Silva, quien cosecha entre el 34 y 37 del respaldo electoral, la posible suspensión de la candidatura del líder del PT ilusiona a



los seguidores de este polémico diputado conocido como el “Trump brasileño”. Su férrea defensa de la última dictadura militar y sus propuestas radicales en tema de seguridad (entre otras cosas propone bajar la edad de imputabilidad, fortalecer la lógica punitivista y “armar a la población” para reducir los elevados índices de violencia ciudadana), permiten ubicar a este personaje dentro de la oleada del nuevo populismo de extrema derecha que se inició con Trump en EEUU y que actualmente amenaza el esquema de poder transnacional de la Unión Europea.

Como se ve el panorama en Brasil es extremadamente complejo de cara a las elecciones y las consecuencias producto de la “caja de pandora” que se abrió con el Lava Jato son aún difíciles de determinar. A pesar de que la mayoría de la población rechaza las propuestas de Bolsonaro (al menos eso sostienen las encuestas), sus chances de llegar al poder se incrementan a medida que se profundiza la crisis de representatividad que atraviesa el país más poblado de Sudamérica. Aunque al final no gane su sola candidatura ya logró quedarse con una importante victoria simbólica: establecer el eje de la campaña electoral en relación a la seguridad, un problema dramático que enfrenta el país pero que lejos está de ser el único. Esto a su vez llevó a que el presidente Temer decidiera en estas últimas semanas crear el Ministerio de Seguridad Pública y anunciar la intervención militar en el sistema de seguridad de Rio de Janeiro (la primera intervención de este tipo desde el regreso de la democracia), con la ilusión de sumar algunos votos que le permitieran “resucitar” su candidatura presidencial. Algo que por el momento parece muy poco probable que suceda.

Ante el poco despegue en los sondeos de su candidato, Geraldo Alckmim, la cúpula del PSDB por su parte está barajando la posibilidad de presentar otro outsider (el presentador televisivo de la red Globo Luciano Huck) para contrarrestar el efecto Bolsonaro. En el PT continúan firmes en su postura de que no hay un plan B y que Lula es su candidato, igualmente no es seguro que los votos que cosecha el ex mandatario se puedan trasladar automáticamente a un posible sucesor en caso de que éste finalmente no pueda participar de las elecciones. La única que parece estar a salvo de esta vorágine de incertidumbre es la ambientalista Marina Silva, a quienes las encuestas ubican en el tercer lugar, quien recientemente alertó sobre la posibilidad que se profundicen las fakes news y la “campaña sucia” de cara a los comicios de Octubre. Esta práctica, que ya estuvo presente en las elecciones del 2014, amenaza con materializarse con aún más fuerza en los próximos meses en



donde distintos sectores van a buscar aprovecharse del escenario caótico actual para fortalecer sus intereses electorales. Por eso es necesario separar pacientemente la paja del trigo al momento de leer y sobre todo informar sobre la actualidad política brasileña (incluso en las redes sociales), para así no promover dinámicas desinformativas que puedan manipular la soberanía popular.